

B. INSERCIONES

1

INSERCIÓN SOLICITADA POR LA SEÑORA
DIPUTADA PUIGGROS

**Opinión de la señora diputada acerca
del artículo 46 del proyecto de ley
de presupuesto de la administración nacional para
el ejercicio 2001.**

Resulta importante la observación ya existente en este citado artículo en relación a que para la formulación del presupuesto del 2002 el Ministerio de

Educación de la Nación deberá adoptar criterios para la distribución de los recursos destinados a la universidades nacionales. Esos criterios deberán ser también plenamente discutidos por el Poder Legislativo como una instancia para construir una herramienta que unifique criterios para todo el territorio nacional, y para ello es indispensable la participación de quienes representan a cada una de las jurisdicciones del país. Para esa tarea el Poder Legislativo consultará en relación a ese tema al conjunto de la comunidad universitaria. Serán muy importantes las consultas y discusiones con el Consejo

Interuniversitario Nacional de modo de establecer de manera conjunta criterios equitativos que reflejen las necesidades regionales e institucionales.

Este mecanismo será necesario para que se puedan desarrollar instancias tendientes a la democratización de la vida universitaria en todas sus instancias, tanto aquellas que se refieren a las posibilidades de ingreso, permanencia y acceso a conocimiento de calidad, así como en la garantía de las condiciones de vida institucional dentro de las cuales se encuentra la participación en la decisión acerca de los criterios por los cuales se distribuyen los recursos. El establecimiento de condiciones de distribución presupuestaria equitativa es uno de los importantes elementos en los que el Estado Nacional debe decidir como parte de su política hacia las universidades. A su vez, estos criterios deben establecerse en consonancia con la existencia de la economía universitaria, motivo por el cual es indispensable que participen de la discusión las instituciones universitarias mismas y los organismos que las manejan.

Pero debe recalcar que toda distribución presupuestaria entre las universidades e instituciones terciarias debe responder a un programa de reforma integral del sistema de educación superior. Ese programa debe, al menos, tener en cuenta:

- Las prioridades nacionales, que deberían, en el caso de la investigación (pero haciéndolo extensible a la promoción de las diversas profesiones y especialidades), según propone el proyecto de ley marco de ciencia y tecnología que ya cuenta con la aprobación de las comisiones de Ciencia y Tecnología y Educación, ser aprobado como anexo de la Ley de Presupuesto, es decir decididas por el Congreso de la Nación.
- Las prioridades regionales, con especial atención al desarrollo económico y social y la cultura de las provincias.
- Las demandas, intereses y motivaciones de las nuevas generaciones.
- Las posibilidades institucionales.
- La capacidad docente y de investigación instalada en cada región, provincia y zona provincial.

Finalmente, si bien un presupuesto es determinante en los programas de cada año, es necesario que los criterios que se elaboren contengan la perspectiva prospectiva de los siguientes años, del mediano plazo, así como la dirección más fundamental, que la sociedad decide tomar mirando hacia su futuro mediato, es decir la vida de las próximas generaciones. Gracias, señor presidente

Ley de presupuesto, artículo 81

Voy a referirme a la asignación de 2.140.000 pesos al proyecto Pierre Auger, con lo cual la Argentina cumple con sus compromisos internacionales y se suma al aumento logrado en la función total de ciencia y tecnología (1.340.000 que logramos

agregar a los 800 mil, inicialmente programados por el Poder Ejecutivo).

En el presupuesto que estamos votando se prevé un aumento del 36,8 millones respecto al año anterior, es decir del 5,6 %, alcanzando así el 0,40 % del PBI como inversión anual en la función ciencia y tecnología, sobre la base del cálculo de la inversión del 2000, que la ubica en el 0,34 %. El proyecto Auger recibe el 3,5 % de los 36,8 millones mencionados.

En 1935, señor presidente, el novelista A. J. Cronin escribió que "las estrellas miran hacia abajo", pero para que el encuentro sea posible, es necesario que las sociedades sean capaces de elevar su mirada al universo y fabricar instrumentos para penetrarlo.

Acudirle importancia a la exploración del cosmos es ensanchar nuestro entorno, osadía indispensable si pretendemos mejorar un destino que puede presentarse cargado de inhumanidad. Posibilidades de trabajo, educación, cuidado de la salud, de un medio ambiente habitable, dependen de la difícil vinculación entre ciencia, desarrollo tecnológico y ética, entre conocimiento y democracia entre poder, inteligencia y amor al prójimo.

Varias veces este año se reunieron en Mendoza más de doscientos de los mejores físicos de 20 países, encabezados por un homónimo del novelista, el premio Nobel James Cronin, para poner en marcha el proyecto Pierre Auger, que está en la vanguardia de la investigación física espacial. En la planicie marrón de Malargüe, apenas interrumpida por los otoñales alamos que invaden ese espacio ya patagónico, se está instalando el observatorio de Pampa Amarilla. Su objetivo es capturar los enigmáticos rayos cósmicos, portadores de incógnitas fundamentales sobre la energía, el origen de la vida y el universo, y enviar la información a laboratorios de varios países que integran la cooperación internacional cofinanciadora del proyecto. La Argentina puede estar orgullosa de haber sido elegida por esa cooperación, como sede del hemisferio sur y que se haya confiado la coordinación del observatorio a nuestros científicos de la Comisión de Energía Atómica, del Conicet y de universidades nacionales, a los que se suman especialistas de los países cooperantes, algunos de los cuales son argentinos, exiliados científicos, que se alegran de participar de un trabajo que se realiza en su país de origen. En este proyecto, físicos, especialistas en comunicaciones y otros, trabajan mano a mano, lo cual no constituye una novedad sino que refleja toda la historia de la ciencia y de la tecnología aplicada al progreso. En la historia de la ciencia los recorridos no son lineales. No se llegó a descubrir la electricidad perfeccionando la vela, pero sin una buena vela, hubiera sido imposible imaginar la electricidad. La tecnología característica de cada época es el lenguaje técnico de una ciencia y el conjunto de conocimientos propios de un oficio, dice el diccionario. No hay ciencia sin tecnología y no se alcanzan cambios tecnológicos sin producción de nuevos conocimientos científicos.

cos pues toda tecnología proviene de una matriz científica.

En el corto plazo, el proyecto Pierre Auger sólo producirá un impacto económico en Malargüe. Pero debe formar parte de la agenda argentina, no sólo por sus inmensas aplicaciones potenciales, sino porque aportará inéditos rumbos al conocimiento de toda la humanidad sobre sí misma y el universo que habita. Este tipo de esfuerzos es alentador en estos tiempos de angustia inmediatez, cuando nuestro país tiene que encarar a la vez la superación de las más profundas injusticias sociales, el atraso cultural y su situación marginal en el escenario internacional.

La necesidad de la inversión pública en investigación y capacitación de investigadores y tecnólogos fue expresada por las empresas que concurrieron a la Cámara de Diputados de la Nación el miércoles 27 de abril, invitadas por acuerdo de la Comisión de Ciencia y Tecnología. Representantes, entre otros, de Siderca, Techint, Bago, Nidera, Iscar, Biosidas, Nutriopac y Polichaco expusieron sobre los aportes e inversiones que están realizando en investigación y desarrollo y demandaron reformas en la legislación que afecta esa tarea. Subrayaron la importancia de la inversión pública en producción de ciencia y tecnología, en la formación de personal para el área por parte de instituciones públicas de educación superior y centros de investigación, y reclamaron la continuidad de los equipos, para incidir en cambios en el perfil productivo de las empresas y aumentar su competitividad.

Desde hace décadas la Argentina padece la emigración de investigadores y tecnólogos que ha formado en instituciones públicas. Ahora se agrega la de aquellos que han completado su formación en empresas, pero que encuentran más oportunidades en el exterior, donde cursan posdoctorados y son empleados de inmediato. Se suma también otro problema: la necesidad de mejorar significativamente las condiciones de formación y de trabajo en el área. Las distintas instituciones superiores públicas deben coordinar urgentemente la formación de los investigadores y tecnólogos y acordar un sistema de evaluación y de promoción confiable y justo. Finalmente, pagar salarios dignos a la escasa cantidad de científicos y tecnólogos que tiene el país no puede seguir siendo una cuestión postergada. En lo inmediato, se debe devolver la rebaja salarial del 12 % y sustituir esa suma por un porcentaje de los pagos de los entes reguladores de las empresas privatizadas, varias de las cuales han cerrado organismos antes estatales, dedicados a la investigación científica y tecnológica de cada sector. Sirva como antecedente, que el ente de regulación de las comunicaciones realiza una transferencia directa a las universidades nacionales para compensar la suspensión de actividades de investigación.

Es incompatible hablar de crecimiento y desarrollo para el país sin prever estrategias que aseguren el desarrollo científico y tecnológico. La capacidad

y las condiciones para crear y absorber conocimientos, y para transformar esos conocimientos en tecnologías aplicables a la producción de bienes y servicios son condiciones previas a cualquier proceso de desarrollo económico y social.

Así lo entendieron históricamente los países de mayor nivel de desarrollo. Estados Unidos, Japón y Europa, invierten en ciencia y tecnología por encima del 2 % de su PBI. Cercanos a ese valor se encuentran Canadá y Australia. Nuestros vecinos Chile y Brasil, con retraso relativo respecto de la Argentina, invierten ya por encima del 0,7 % de su PBI.

Entendiendo con claridad esta necesidad estratégica, la Alianza planteó en su programa una meta del 1 % del PBI teniendo en cuenta la inversión pública y privada, en su periodo de gobierno. La crítica situación económica heredada, llevó al gobierno a implementar medidas, impopulares en algunos casos, tendientes a controlar el gasto público. No obstante la función ciencia y tecnología en su conjunto, crece levemente en el proyecto de presupuesto 2001 respecto del año anterior. El 4,6 % de crecimiento en el presupuesto no es suficiente. Sin embargo somos conscientes de que, en una situación crítica como la que nos encontramos, ha existido consenso en, por lo menos, mantener los presupuestos que permitan seguir funcionando a los organismos del sistema.

Pero no es suficiente. CNEA, INTA, INTI, Segemar, entre otros, ven disminuidos sus presupuestos, y con ello su capacidad de encarar nuevos proyectos y mejorar las condiciones a sus investigadores. Conociendo las limitaciones de los recursos presupuestarios, encaramos acciones para redistribuir fondos hacia estos organismos.

Es así que, a nuestra propuesta, la Secretaría para la Tecnología, la Ciencia y la Innovación Productiva, se acordó, como señala el artículo 90, que fondos presupuestarios previstos para los programas que encare la secretaria a través de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, se orienten a proyectos de estos organismos como forma indirecta de aumentar sus presupuestos con proyectos específicos, así como también, propender a una mayor articulación entre la secretaria y el conjunto de organismos científicos y tecnológicos.

La secretaria accedió a transferir de sus previsiones presupuestarias \$ 3.000.000 al Conicet. Tal modificación está prevista en el artículo 99 del proyecto de ley. De esta manera este organismo trascendente para la generación de conocimiento podrá, por lo menos, abonar los sueldos normalmente y garantizar el acceso a la carrera de los investigadores que tengan las condiciones para ello.

Se ha incrementado en \$ 1.380.000, el presupuesto de la CNEA para llevar adelante el proyecto P. Auger. De esta manera Argentina hará frente a los compromisos asumidos internacionalmente para llevar adelante un proyecto de vanguardia en el estudio de rayos cósmicos en sociedad con países y científicos del más alto nivel en el mundo.

Los incrementos presupuestarios en la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, a los que se agregan compromisos por \$ 11.000.000 para la ejecución de la Plataforma Satelital SAOCOM 1 A, Fase II en cumplimiento del Plan Espacial Nacional previsto por los decretos 2.076/94 y 1.330/99 son previsiones que, sin duda, es necesario resaltar, en beneficio de nuestro desarrollo científico y tecnológico.

Insistimos. Todo esto no es suficiente. La meta de alcanzar en el mediano plazo una inversión en ciencia y tecnología equivalente al 1 % de PIB es un compromiso de la Alianza que debemos cumplir por el bien de toda la sociedad. El Estado como responsable principal debe hacerse cargo, como en todos los países del mundo, de la parte sustancial, al tiempo de generar las condiciones para aumentar la inversión en tecnología del sector privado, como única forma de mejorar su competitividad.

Por último. El desarrollo del conocimiento y su aplicación tecnológica requiere condiciones personales que promuevan la creatividad de investigadores y tecnólogos. Es obvio que esto requiere de salarios que incentiven dicha creatividad. No estamos exigiendo, en ese momento, salarios equivalentes a los que obtienen los investigadores en los países centrales, que significan la emigración de cerebros formados con nuestros presupuestos pero sí mostrar una tendencia a establecer condiciones más dignas para su actividad. Pretendemos, que en una primera instancia, se reintegre el 12 % al personal de los organismos del sistema científico y tecnológico, como una señal en ese sentido.

Nos queda pendiente para los próximos años, asumir los compromisos tomando iniciativas que produzcan un cambio estructural que mejore el financiamiento de la actividad científica y tecnológica. No sólo los investigadores, sino la sociedad toda, debe hacerse cargo de esta necesidad.

Señor presidente: bajo la hegemonía del pensamiento neoliberal, venimos de más de una década de menosprecio por todo instrumento que tenga visos de constituirse en una política activa de gestión estatal. Sin embargo cuando uno observa la experiencia de los países que han tenido en estas últimas décadas un fuerte proceso de desarrollo socioeconómico, podría derivar dos claras conclusiones: en primer término, estos procesos han sido claramente orientados y fomentados por políticas activas diseñadas desde el Estado. En segundo lugar dichos procesos de desarrollo, se han conducido fundamentalmente por la vía de un fuerte desarrollo tecnológico que se apoya en la innovación, principalmente a nivel empresario.

Nuestro país tiene actualmente una situación que denota fuertes restricciones desde el marco macroeconómico y un entramado productivo con un conjunto de limitaciones, entre la que no es menor la falta de empresas innovadoras, la pobre inversión en investigación y desarrollo y la dramática situación de las pequeñas y medianas empresas. Por otro

lado, pese a que en los últimos años se ha pretendido, sobre la base de una suerte de malabarismo estadístico, ver que la inversión en ciencia y tecnología y más específicamente la financiación por parte de las empresas ha aumentado, lo cierto es que ni una cosa ni la otra han sucedido y nuestra inversión en su conjunto se mantiene por debajo de los niveles que quisiéramos para nuestro país.

Por otra parte nos encontramos con un gran desequilibrio en el sistema mismo de ciencia y tecnología. No se trata solamente de los problemas que aquejan a la estructura que depende del Estado nacional, también hay que recalcar la fuerte asimetría que existe entre los esfuerzos que el Estado realiza y los que realiza el sector privado. Debemos pensar que un fuerte impulso a la innovación sólo viene de la mano de un fuerte involucramiento de las empresas en el proceso de creación del conocimiento tecnológico y su aplicación a la producción. La generación de tecnologías propias y la capacidad de operación de las tecnologías que podemos captar de ciertos espacios internacionales, son condiciones imprescindibles para elevar la competitividad de nuestra producción, tanto en el mercado nacional, como en el internacional y en última instancia un requisito básico para crear una atmósfera productiva que permita el desarrollo de nuestro país.

Tenemos entonces la obligación de utilizar y multiplicar los instrumentos que, por una parte, permitan la concertación y coordinación entre las distintas fases de la investigación y el desarrollo tecnológico que mayoritariamente se realiza en las instituciones públicas, y las empresas, especialmente las medianas y pequeñas, que es donde descansa la mayor potencialidad para las tareas innovativas; y por otra permita la creación de nuevas empresas con una fuerte base tecnológica.

Argentina, pese a la hegemonía durante estos últimos años del pensamiento liberal, tiene una larga historia de políticas activas en pro del desarrollo industrial. Ciertamente es que no siempre ha dado los frutos pretendidos, por obra en muchos casos de formas e instrumentos que promovían negocios para unos pocos y en otros, por la aplicación de instrumentos inadecuados a los fines originalmente propuestos. Sin embargo, no deberíamos tirar el agua sucia junto con el niño. Es todavía cuantioso lo que el Estado gasta o invierte en regímenes de promoción económica regional y sectorial y la prueba está que el costo total fiscal de estos regímenes en el presente presupuesto ronda los setecientos cuarenta millones de pesos. Sin embargo no necesariamente la decisión sobre esto ha sido lo suficientemente discutida sobre la base de los parámetros que se vinculan al desarrollo real del entramado productivo de nuestro país y las perspectivas de mediano plazo que se puedan tener en el plano de la ciencia y la tecnología, y una señal de que esto es así es la eliminación del régimen de promoción y el fomento de la investigación y el desarrollo científico y tecnológico en el marco de la ley 23.877. Para este ré-

gimen se han hecho en los años anteriores, previsiones de crédito fiscal de veinte millones, que las empresas podían utilizar para descargar del impuesto a las ganancias y que ha tenido importancia en el desarrollo de empresas con una fuerte base de desarrollo e innovación tecnológica. Lamentamos muy sinceramente que no se haya tomado en consideración que es un instrumento privilegiado para la promoción de las actividades de investigación y desarrollo intraempresarial, que por otra parte es utilizado en innumerables países con particular eficacia. Por estas razones insistimos una vez más y no podemos aceptar con nuestros votos el recorte que está dirigido a actividades vitales para el mediano plazo de nuestro país.

Inserción al artículo 90

El INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agraria) es soporte de miles de pequeñas y medianas productoras y proveedor de grandes empresas agropecuarias y de su actividad dependen exportación, mercado interno, empresas y fuentes de trabajo. El instituto es un pilar del desarrollo regional y el deterioro o desaparición de sus agencias afectará directamente la posibilidad de superar la crisis para considerables sectores económicos y sociales. Todas las organizaciones de productores se han pronunciado a favor de un decidido apoyo oficial al INTA, recalcando su acuerdo con el proyecto que le otorga autarquía.

El mencionado proyecto de ley (que cuenta ya con el acuerdo de cuatro de las cinco comisiones a las cuales fue enviado) establece el régimen de autarquía y la asignación del 0,5 por ciento de las importaciones para el organismo. Se trata de la transformación del impuesto a las exportaciones, ya destinado al INTA.

Dado el avance del acuerdo político y el consenso social respecto del proyecto de ley mencionado, las autoridades del INTA y los legisladores evaluamos que la asignación propuesta en el proyecto de presupuesto 2001 por el PEN, de por sí insuficiente para el normal funcionamiento del organismo, podía subsanarse en lo inmediato si el INTA contara con autarquía. De esa manera estaría en condiciones de programar su ejecución financiera realizando ahorros cercanos a la quinta parte de su presupuesto 2001. Debe subrayarse que el INTA realiza una excelente gestión y sostiene una organización eficiente; probablemente es el más eficiente de los organismos del sistema nacional de ciencia y tecnología.

Sin embargo, hemos recibido señales negativas de algunos funcionarios y se ha puesto en duda la necesidad de la existencia del instituto. Creemos que tal opinión debe partir de la falta de conocimiento de la tarea que allí se realiza, de las características específicas de la gestión y de la profunda vinculación que existe entre las agencias del INTA y las demandas de innovaciones tecnológicas de productores de todo tamaño.

En síntesis, estamos votando el presupuesto junto con la reafirmación de nuestro compromiso de tratar de obtener el voto favorable de esta Cámara para la ley de autarquía del INTA, que deberá presentarse en las más próximas sesiones.

Artículo 89. Otorgamiento de avales por parte del Tesoro nacional.

El presente artículo faculta al jefe de Gabinete de Ministros a comprometer avales, entre otros, a los siguientes entes:

1. INVAP S.E.

Monto máximo autorizado (en pesos): 36.000.000.
Contrato con Australian Nuclear Science and Technology Organization (ANSTO).

Provisión de un reactor nuclear (garantía de buena ejecución, anticipos y operaciones de prefinanciación de exportaciones).

Confundiendo en el emprendimiento exitoso de INVAP, el Estado nacional confiere los avales necesarios para la obra emprendida en Lucas Heights (Sydney, Australia), rubricando así la confianza en la innovación del desarrollo tecnológico argentino. Al igual que el reactor que está operativo en ese mismo sitio, el equipo que construirá el INVAP se vincula a la producción de radioisótopos para uso médico, aplicaciones industriales y experimentos de física básica. Actualmente los elementos combustibles quemados de dicho reactor son enviados por Australia a Francia para ser tratados por la empresa COGEMA.

El contrato que INVAP firmó con ANSTO para la provisión del reactor establece que existe en nuestro país una tecnología viable para acondicionamiento de elementos combustibles basados en silicio de uranio. Este fue un requerimiento del pliego de la licitación que debían cumplir todos los oferentes, proponiendo una alternativa al tratamiento que hasta hoy se está realizando en Francia. La Organización Australiana de Ciencia y Tecnología Nuclear decidirá, en el futuro, si contratará un nuevo servicio de acondicionamiento, o si continúa como hasta hoy. El Congreso de la Nación seguirá atentamente la evolución de ese desarrollo, en la creencia de que todo país que se beneficia con la tecnología nuclear debe hacerse cargo de la gestión para la disposición final de sus propios residuos nucleares. La exportación de reactores de investigación, así como la de sus elementos combustibles asociados constituye una tecnología de punta de muy alto valor agregado, probándose que la Argentina está en condiciones de competir y ganar en las licitaciones más importantes del mundo.

Cabe recordar aquí que INVAP es una Sociedad del Estado que pertenece a la provincia de Río Negro y mantiene un vínculo estrecho con la Comisión Nacional de Energía Atómica, CNEA. Antes de haber ganado la licitación en Australia para la pro-

visión de un reactor nuclear, el INVAP exportó reactores o equipamiento nuclear a Perú, Argelia, Cuba, Irán, Rumania y Turquía

2. Nucleoeléctrica Argentina S.A.

Los avales son cuatro y, los montos máximos autorizados para cada uno de ellos son: 8.287.500, 12.750.000, 487.500 y 750.000. En todos los casos los avales están aplicados a Atucha I. Para los dos primeros, es deuda externa financiera y para los dos últimos es deuda externa comercial. Nucleoeléctrica Argentina S.A. inició sus actividades el 7 de setiembre de 1994 y tiene a su cargo la producción y comercialización de la energía eléctrica producida por las centrales nucleares Atucha I y Embalse y la construcción de la Central Nuclear Atucha II. Los objetivos de la empresa se centran en mejorar la performance histórica de generación eléctrica y en lograr costos de generación competitivos con los de otros generadores del mercado eléctrico mayorista argentino. Al estar concebida como una entidad de negocios de la generación nuclear, la empresa debe preservar el dominio de la tecnología de sus plantas y de sus componentes. Los avales del Tesoro nacional arriba mencionados ratifican a Nucleoeléctrica Argentina S.A. como una empresa capaz de adaptarse al mercado de generación eléctrica con herramientas altamente competitivas.

Por las razones hasta aquí expuestas prestamos nuestra aprobación al artículo 89 del presupuesto nacional 2001.

2

INSERCIÓN SOLICITADA
POR EL SEÑOR DIPUTADO BAYLAC

Opinión del señor diputado acerca del artículo 59 del proyecto de ley de presupuesto de la administración nacional para el ejercicio 2001.

Introducción

Todo el mundo habla hoy de la globalización, a veces deplorando sus consecuencias –desempleo masivo, concentración extrema de la riqueza, debilitamiento de los Estados nacionales– y otras veces con admiración por los enormes logros en materia de comunicaciones y circulación de bienes y mercancías.

Es obvio que estas y otras interpretaciones contienen su parte de verdad, ya que sería necio negar que si por un lado este fenómeno vino de la mano de un enorme salto científico-tecnológico, no es menos cierto que –principalmente en los países periféricos– destruyó masivamente fuerzas productivas a favor de la economía monetaria, ahondando la brecha entre pobres y ricos a nivel mundial.

Pero la globalización es un fenómeno que no sólo atañe a la revolución científica y tecnológica sino a un proceso global que pone en cuestión todos los

paradigmas de organización social, política y económica que hayamos conocido.

¿Habría que preguntarse, entonces, no sobre los obvios beneficios del portentoso avance del capitalismo mundial en términos de la producción material ni sobre la no menos obvia profundización de las desigualdades, sino sobre el sentido y la orientación que se le ha impreso a la mundialización de la economía. En otras palabras, no se trata de rechazar la globalización sino de entenderla en toda su dimensión y consecuencias, ya que sólo así es posible que países como el nuestro, con un alto grado de subordinación a la economía internacional, puedan adaptarse a un mundo sumamente competitivo y cuyas oportunidades hay que aprovechar con tesón y esfuerzo.

Ocurre que el nuevo marco de competitividad tiene características salvajes: la regla del mercado hoy es no tomar prisioneros. En otras palabras, la concentración del capital se realiza en base a la eliminación del rival, a su destrucción lisa y llana, todo ello favorecido por Estados que se desentienden del valor social de una competencia virtuosa en el marco de programas de integración productiva.

Por otra parte, si hasta hace muy poco tiempo parecía imponerse sin resistencias el llamado “modelo único”, nacido bajo las administraciones de Margaret Thatcher en Gran Bretaña y Ronald Reagan en los Estados Unidos, no cabe duda de que recientes procesos políticos europeos (Inglaterra, Francia, Italia, Alemania) han reabierto el debate sobre el papel del Estado y los peligros de la concentración económica y la megaespeculación financiera.

En nuestro continente declina el fetichismo del mercado mientras se replantea el papel de las políticas activas a favor de la producción y el trabajo, mientras que en el terreno de la cultura social comienzan a recuperarse valores como la solidaridad y la participación.

Ya no se trata sólo de los costos sociales –por cierto altísimos– del modelo que se impuso junto con la globalización, sino que lo que está en discusión es el grado de seguridad (económica y social) que puede ofrecer una propuesta tan excluyente que amenaza las bases mismas de la gobernabilidad democrática.

Las nuevas posiciones que asume el Estado –o que debería asumir– están referidas a su participación en la promoción de nuevas tecnologías, en procesos y sectores de la producción que fomenten la competitividad nacional en el marco internacional; la centralidad de la educación y el conocimiento como insumo decisivo en la expansión del empleo, la reconversión tecnológica y la competitividad.

Este es el debate que dominará seguramente el escenario teórico y político de los próximos años. Por nuestra parte, este trabajo es un intento por avanzar en la comprensión de los profundos cambios que trajo la globalización y cuáles son sus consecuencias a nivel nacional y regional.

Del Estado social al Estado mínimo

La crisis del modelo de Estado y de desarrollo vigentes en los países de Occidente desde la posguerra, trajo crecientes cuestionamientos a la administración pública que culminaron con la retirada de la gestión estatal sobre numerosas actividades y con la redefinición de las tareas que quedaban a su cargo.

Así es como, a partir de la década del 80, comienzan a revisarse las modalidades tradicionales de gestión y de relación con la sociedad y se procuran esquemas más adecuados para el desarrollo de las administraciones públicas. En este contexto, la calidad de los servicios recibidos por los ciudadanos adquieren una inusual relevancia y ocupan una importancia creciente en la agenda pública de los Estados embarcados en procesos de reforma.

El modelo burocrático tradicional se había afianzado en base a la creciente responsabilidad estatal sobre diversas tareas colectivas planificadas y ejecutadas por burócratas con alto grado de calificación técnica, pero sin responsabilidad directa frente a los ciudadanos. Este esquema se sustentaba en el supuesto de que quienes tomaban las decisiones públicas prestarían atención a los intereses sociales significativos y actuarían guiados por el interés general. Sin embargo, nada garantizaba que la intervención estatal fuera de hecho beneficiosa, ya que, operando con información limitada y sujetos a presiones de intereses específicos, a menudo los funcionarios públicos desconocían o no querían comprometerse en acciones que promovieran el bienestar general por sobre el suyo propio o el de sus aliados privados.

Tras el desmoronamiento de este arquetipo estatal, conocido como autocentrado, las corrientes neoliberales propiciaron la instrumentación de políticas de ajuste y estabilización con los objetivos proclamados de superar los crecientes desequilibrios macroeconómicos de la década del 80 y de adaptar el sector público a las nuevas formas de la economía mundial.

Desde esta perspectiva, la crisis de la fórmula estadocéntrica se resolvía mediante reformas estructurales que respondían a los problemas generados por una intervención estatal desmedida e inadecuada con un Estado mínimo.

Paradójicamente, mientras la lógica económica de los planes de estabilización plantea la reducción del Estado en un contexto de profundos cambios en la estructura social, con agudización de la pobreza y la marginalidad y precarización de los sistemas de educación, salud y trabajo, la lógica política demanda eficiente poder y eficiencia estatal, como base de sustento de las políticas públicas a través del tiempo.

Por eso Guillermo O'Donnell, al alertar sobre los efectos potencialmente disruptivos de las estrategias de ajuste, señala que "los intentos de reducir el tamaño y las deficiencias del Estado-como-burocracia también están destruyendo al Estado-en-ten-

to-ley y su legitimación ideológica, en parte inadvertidamente, pero con nefastas consecuencias de todo tipo (incluso para el éxito a largo plazo de las políticas económicas inspiradas en dichos intentos)".

Para O'Donnell "un Estado incapaz de imponer su legalidad sustenta una democracia con una ciudadanía de baja intensidad (...) en las que diversos grupos no gozan de acceso a servicios públicos a los que tienen derecho".

El propio Banco Mundial -impulsor de las privatizaciones de servicios públicos como estrategia excluyente para el redimensionamiento del Estado- señala la preeminencia de la regulación de los servicios públicos en el ámbito de la acción estatal. Para este organismo, la existencia de fallas de mercado -especialmente las externalidades y la ausencia de competencia- impiden la coincidencia entre los objetivos privados de los proveedores y los objetivos sociales e instalan la regulación en la agenda del desarrollo, como un modo de contribuir al mejor funcionamiento del mercado.

También es de fundamental importancia el hecho, señalado por varios autores, de que el problema de la regulación trasciende la alternativa mercado no mercado y, como tal, plantea una distinción entre la regulación económica y la regulación social.

En el primer caso, la regulación estatal se centra en aspectos económicos, con el propósito de lograr la prevención o el control del poder monopólico a través de la fijación de tarifas, especificación de normas de servicio, preservación de la competencia y control de la entrada de nuevos competidores en determinados sectores económicos.

Pero la actividad regulatoria del Estado también puede apuntar a corregir posibles impactos de las actividades económicas sobre el medio ambiente, la salud, la seguridad de los trabajadores, los intereses de los consumidores, además de encargar medidas antidiscriminatorias o de garantía de los derechos de ciudadanía. En estos términos, cabe hablar de regulación social.

Aunque ambas formas de regulación no son excluyentes remiten a esferas de acción diferentes. Mientras la regulación económica funciona como complemento del mercado y trata de contribuir a su buen funcionamiento, la regulación social se sitúa más allá del mercado, precisamente porque parte de reconocer insuficiencias en la lógica mercantil y, en consecuencia, trata de mitigar sus efectos disruptivos y resguardar ciertos derechos básicos, que incluyen la protección de los terceros ajenos a la relación de intercambio.

La discusión acerca de la regulación estatal tiene mucho que ver con la innegable necesidad de una nueva relación de los usuarios con los servicios públicos, superadora de los esquemas tradicionales, en los que aquéllos quedaban relegados a un lugar de administrados pasivos.

Se trata de insertar en la administración pública un nuevo pensamiento gestor, un "management

público" que confronte con las actuales demandas de la ciudadanía y en el que se reconozcan tanto las competencias técnicas como las competencias sociales.

La consolidación de canales que permitan a la administración conocer la opinión de la ciudadanía es, a juicio del Banco Mundial, indispensable para garantizar que las políticas respondan a la satisfacción de las necesidades colectivas.

Aunque los mecanismos electorales son indiscutiblemente la forma más arraigada de expresión de la opinión popular, según el Banco Mundial la periodicidad electoral no es garantía suficiente para que el Estado responda adecuadamente a los intereses de la población. Es por eso que alienta la representación de las organizaciones intermedias en los ámbitos encargados de la formulación de políticas, especialmente en niveles locales y provinciales de gobierno, por considerar que la participación de los usuarios de los programas estatales revierte en una ejecución más eficiente, una mayor sostenibilidad y un mejor intercambio de información.

Señala también que la disponibilidad de información y la transparencia son los instrumentos que hacen posible el debate público sobre los asuntos que serán considerados prioritarios en la elaboración de políticas públicas. En este marco, resulta decisiva la atención a los grupos sociales más desfavorecidos, que son los que tienen menores posibilidades de hacerse oír. Por otro lado, la información y la presión social son elementos considerados clave para una regulación eficiente en los casos en que la capacidad institucional del Estado es débil.

Las decisiones que surgen de procesos sociales participativos cuentan con un mayor grado de legitimidad y aceptación, contribuyendo a superar la crisis de representación y la ruptura de la identidad entre gobernantes y gobernados.

Desde la perspectiva del "management público" mencionado anteriormente, la participación social en la gestión de los intereses públicos constituye un derecho de cualquier miembro de la sociedad en tanto forma parte de un agregado concebido como "lo público". El ejercicio de este tipo de derechos puede ser calificado entonces como "acciones de gestión" de los intereses públicos, mediante las cuales la administración debe recibir las demandas planteadas por los destinatarios y éstos, a su vez, pueden defender sus intereses frente a ella.

En un contexto social caracterizado por la creciente complejidad de las interacciones entre sujetos cada vez más heterogéneos y con necesidades, aspiraciones e intereses diversos, cabe entonces preguntarse: ¿quién es el destinatario y cómo se relaciona con la política pública?

Que el receptor de las políticas sea concebido como un consumidor en el mercado, un cliente de un servicio o un ciudadano no es una mera cuestión terminológica sino un punto crucial en la determinación de las políticas públicas.

El nuevo rol del Estado

Como ya se ha dicho, hacia finales de la década del 80 el capitalismo mundial sufrió profundos cambios en el marco de la globalización de la economía y la creciente hegemonía del capital financiero por sobre el capital productivo. Paralelamente, la mayoría de los países de América latina, que emergían de la crisis de la deuda externa y, en general, de los modelos heredados de los procesos de sustitución de importaciones, se vieron forzados a encarar drásticas reformas basadas en un replanteo general del papel del Estado en la vida económica.

Tales procesos incorporaron una combinación de políticas clásicas de shock estabilizador con reformas estructurales del sector público —privatizaciones, desregulaciones, descentralización y desconcentración administrativa—, apertura económica y liberalización de los mercados.

Los nuevos enfoques obedecieron más a la necesidad que a la virtud y, precisamente por ello, carecieron de ideas y propuestas de mediano y largo plazo capaces de darle una perspectiva estratégica a los cambios alcanzados y, lo que es muy importante, prevenir y compensar el impacto social de las reformas en la concentración económica, el nivel de empleo y la distribución de la riqueza social.

En varios casos (notablemente en México y la Argentina), la nueva orientación económica se encarnó en partidos y dirigentes políticos provenientes de ideologías opuestas a la filosofía neoconservadora, lo que implicó que sobreactuaron sus nuevas convicciones. Política y economía avanzaron sobre la base de equilibrios complejos e inestables, y el resultado final aguarda todavía un balance de conjunto, capaz de integrar las diversas ópticas del análisis social.

Como indicador elocuente de la envergadura de los cambios ocurridos en el caso argentino, basta consignar que entre 1989 y 1994 un tercio de la economía pasó del sector público al privado.

En 1993, concluida la primera etapa del proceso privatizador, el traspaso ya había incluido 158 unidades de negocio, correspondientes a sectores esenciales para la comunidad como telecomunicaciones, petróleo, energía eléctrica, gas, agua potable, transporte aéreo y ferroviario, puertos, industria química y petroquímica, infraestructura vial y servicios sanitarios.

En los años iniciales de la reforma, el debate público se concentró en los problemas de legitimidad y oportunidad de las privatizaciones, y la reforma del Estado. Hoy, ya concluido el núcleo fundamental de la reforma, surgen otros problemas decisivos en la agenda pública, ya que el nuevo marco de relaciones entre el Estado y la sociedad plantea desafíos y problemas radicalmente nuevos relacionados con la regulación y el control. Entre ellos, se destaca la discusión sobre las diversas formas de participación de la sociedad en el desarrollo de las prestaciones de los nuevos servicios.

Ocurre que, en el marco del Estado posprivatizador, se definen nuevas funciones y nuevas relaciones de servicio a partir de las cuales los usuarios, las empresa prestatarias, el Estado y los entes de control afrontan la necesidad de un nuevo diseño de la mayor parte de las categorías heredadas tales como el concepto de servicio público, función pública, regulación, control, etc. Problemas y realidades nuevas exigen enfoques y respuestas de nuevo cuño, superadoras tanto de las referencias al viejo Estado ineficiente y deficitario como al Estado desertor que libra absolutamente los derechos sociales al arbitrio de los mercados.

Se trata de una tarea compleja que implica, por sobre todo, una comprensión cabal de las nuevas demandas de una sociedad cada vez más informada, vigilante, exigente y dinámica. Al mismo tiempo, exige asumir la necesidad de que los nuevos esquemas de gestión se hagan cargo de modo integral de las demandas sociales efectivas a las que los servicios van dirigidos. En este sentido, el ámbito del poder municipal es escenario de cambios profundos.

Sin embargo, la cuestión fundamental estriba en cómo ha de producirse el necesario tránsito de la filosofía general de administración de los servicios hoy predominante, que se apoya en la idea de producto-cliente, hacia una filosofía diferente, fundada en la necesidad de satisfacer las necesidades reales y efectivas de los ciudadanos. La nueva idea de administración de los servicios debe equilibrar los enfoques orientados a la pura y simple necesidad de maximizar el beneficio de los prestatarios privados a través de un énfasis unilateral en sus objetivos de maximización de resultados con independencia de las necesidades que se procura satisfacer.

Las necesidades actuales del servicio obligan a implementar desde un primer momento un modelo de administración capaz de conciliar los imperativos de eficiencia y rentabilidad con el objetivo primordial de dar respuesta a las expectativas y necesidades de la población usuaria. Ello supone una interacción eficiente entre oferta y demanda de los nuevos servicios.

Se trata de conjugar eficiencia económica, técnica y social como tres dimensiones inexcusables para el cumplimiento de los objetivos deseables en una reforma estatal moderna y equitativa.

Esta nueva perspectiva requiere, para producir resultados efectivos, que sea entendida y acompañada por los poderes públicos y la sociedad. De ahí la importancia de los marcos regulatorios y de la función de fiscalización y control permanente a que dichos servicios deben ser sometidos.

Sí, hasta el presente, la reforma del Estado ha favorecido ampliamente el nuevo papel de la iniciativa privada, de aquí en más se abre un debate mucho más complejo y difícil, referido al sentido de las regulaciones y el control en el nuevo escenario de la posprivatización.

Las nuevas funciones apuntan a objetivos de control, garantía, protección, preservación, información, concertación, incitación, disuasión, interpretación y encuadramiento. Complementan, sin sustituirlas, las funciones clásicas de los poderes constitucionales referidas a la legislación sustancial, la administración y, sobre todo, la jurisdicción. La fortaleza futura del Estado posprivatizador —y, con ello, la de su función esencial en el sistema social— dependerá de su capacidad para autolimitarse al ámbito exclusivo de sus competencias específicas.

Los organismos encargados del control nacen como una respuesta a la creciente especificidad y complejidad técnica de las materias que vienen a ordenar. Se trata de autoridades administrativas dotadas de independencia funcional y autonomía de gestión. En un campo como, por ejemplo, el de la energía, la regulación no se agota en el dictado de una norma general, así como el control tampoco se agota en la simple operación automática de subsunción de ciertos hechos dentro de una norma general.

En su sentido más moderno, la regulación requiere que la generalidad de la legislación sea complementada por una tarea permanente de flexibilización y adaptación a los problemas concretos de la realidad regulada. De ahí precisamente las funciones reguladoras de los entes: desarrollan pautas generales propuestas por el legislador, buscando el desarrollo y la consolidación efectiva del nuevo sistema.

Por otra parte, la tarea de control no queda debidamente cumplimentada por la función de jurisdicción general. Más que de sanciones negativas o represivas —aplicativas de normas generales a un hecho particular— el marco regulatorio prevé sanciones positivas, cuya finalidad es promover cambios en un sentido deseado por el legislador. La función judicial tradicional no basta, ya que, por su propia naturaleza, no puede dictar normas generales o reglamentarias: debe limitarse a juzgar casos concretos con normas que, por su carácter sancionatorio, imponen principios de interpretación estricta y prohibición de analogía. Cuando los entes sancionan, lo hacen también en función de ese imperativo general de consolidación del sistema y no simplemente como una suerte de primera instancia dentro del mecanismo sancionatorio general.

De ahí, pues, que el ejercicio de facultades reglamentarias, jurisdiccionales y sancionatorias de las nuevas agencias administrativas de regulación y control no puede entenderse al margen de las finalidades esenciales del marco regulatorio. Su función es la de cumplir con los principios imperativos procurados por el legislador: la promoción de los principios informadores de la nueva organización del servicio privatizado. No pueden limitarse únicamente al control externo de la gestión privada. Son actores principales del nuevo escenario de las relaciones de servicio y participan de pleno derecho en todas las responsabilidades que la situación plantea. Su independencia funcional y autonomía finan-

ciera les permiten, sobre todo, ejercer sus facultades de reglamentación y control sobre todos los actores del nuevo sistema.

Sin embargo, no debe considerarse a los entes únicamente como un organismo más de control de la actividad de los concesionarios. En primer lugar, porque su competencia se extiende también a la actuación y a las omisiones de los poderes públicos. Su función arbitral abarca a todas las cláusulas contractuales. Tanto las que obligan a los particulares como, muy especialmente, las que obligan al Estado. En segundo lugar, porque la justificación profunda de su cometido está dada por la necesidad de garantizar los objetivos generales del sistema. El registro puntual de supuestos incumplimientos sólo cobra sentido a la luz de una tarea de evaluación general de los nuevos servicios en la que se tengan en cuenta aspectos estratégicos referidos al sistema en su conjunto.

Una de las limitaciones mayores de la idea de control elaborada desde el campo del derecho administrativo es la de su lejanía respecto a los resultados de las políticas y programas públicos. Su interés principal recae más bien sobre los procedimientos. Se controla y evalúa el cómo de las decisiones públicas y no el qué se decide. Las razones de la decisión quedan así por lo general al margen de un control de calidad riguroso.

El contenido, mérito u oportunidad de una decisión es, desde esta óptica, una materia ajena a la competencia del control administrativo o judicial y más bien propia de un amplio campo de discrecionalidad administrativa e, incluso, política. De no mediar arbitrariedad manifiesta, las decisiones sólo experimentan un control de su validez formal o material a través de un mecanismo de legitimación procedimental. De esta manera, el planteamiento tradicional de mecanismos básicos como la división de poderes se ve superado en su objetivo originario de limitar efectivamente la discrecionalidad del poder, puesto que las dimensiones técnicas o políticas de una decisión "correcta" escapan a su ámbito propio de competencia.

Reconstruir la idea de control dentro de un contexto de complejidad social creciente supone, pues, la necesidad de integrar herramientas conceptuales y operativas diversas. Derecho, ciencia política, teoría y técnica de la administración aparecen así como instrumentos centrales, cuya eficacia dependerá, en definitiva, de una adecuada comprensión de los aspectos sociales, históricos y económicos de la evolución y expresión actual del papel del Estado en la sociedad.

No cabe duda, entonces, que el control de los servicios públicos privatizados es uno de los temas principales de la agenda de esta etapa. En rigor, deberíamos hablar de la reformulación del rol del Estado, de la aplicación de nuevas políticas y de la elaboración de nuevos instrumentos jurídicos que den cuenta de una problemática que afecta a la sociedad en su conjunto.

Pasado el proceso privatizador que se inició en 1989 con las leyes de emergencia económica y de reforma del Estado, y más allá de los graves vicios de origen de este proceso, lo que está en debate es, por una parte, cómo se han de ordenar, ampliar, eficientizar y transparentar los controles del poder público, y por la otra, una discusión más vasta y de mayor alcance que se refiere a los derechos sociales involucrados y a la reelaboración del concepto de ciudadanía, esto es, al sujeto social de las transformaciones en curso.

Ocurre que la privatización de los servicios públicos implica el tránsito de un Estado titular y prestador de dichos servicios a un nuevo Estado que, sin abandonar la titularidad y precisamente por ello, ha adquirido responsabilidades y deberes que son absolutamente novedosos. Así, la próxima etapa, se caracterizará por la formulación de políticas destinadas a regular una realidad sumamente compleja que va desde la definición de los marcos regulatorios, vía el Congreso de la Nación, hasta la elaboración de normas estables y transparentes que rijan el sistema.

Una de las cuestiones prácticas más complejas se refiere a la adecuación de los contratos de los distintos servicios, la armonización de los plazos de concesión y las necesidades de inversión, así como la fiscalización de las condiciones de cumplimiento o incumplimiento de lo pactado.

Estos son algunos de los varios problemas que estamos encarando. Pero el debate sobre el Estado posprivatizador admite otros abordajes, ya que si bien tiene aspectos sumamente concretos, mensurables en términos de tarifas, inversiones, tasas de rentabilidad, etcétera, también involucra cuestiones jurídicas, económicas y políticas de gran importancia.

Todo lo cual atañe a la legitimación de las privatizaciones como instrumento de política económica, a la seguridad jurídica y a otras cuestiones tan trascendentes como la preservación de los derechos sociales, la vigencia o la ausencia de políticas sociales inclusivas y otros temas que hacen a la medula misma del régimen democrático.

Antes de seguir adelante, hay que mencionar a los actores del sistema: los ciudadanos, que son los destinatarios del servicio, las empresas concesionarias, que deben realizar la prestación en el marco de determinadas condiciones, y el Estado, que a través de organismos específicos pertenecientes al ámbito ejecutivo y del Congreso Nacional, tiene una responsabilidad política ineludible en lo que hace al amparo de los derechos ciudadanos, tanto en el control de los aspectos técnicos de las prestaciones como en los aspectos políticos relacionados con el interés social.

Por ello es preciso que haya una interacción estrecha entre los tres tipos de controles: el que se refiere con los aspectos técnicos de la prestación, de acuerdo a las condiciones pactadas y los marcos regulatorios, el control político, que es deber

ineludible del Parlamento a través de las comisiones específicas, y el control social, que ejercen las organizaciones de consumidores

Tal interacción, especialmente la que vincula al Congreso con la comunidad, cobra importancia en la medida en que los mecanismos representativos democráticos se fortalecen con la participación social, al tiempo que la acción conjunta contribuye al equilibrio entre el espacio de lo público y la esfera privada.

Otra cuestión atañe a la doctrina jurídica de las privatizaciones, cuya elaboración aún se halla pendiente. Este tópico involucra tanto a principios constitucionales, que han sido heridos en el proceso privatizador y que corresponde reparar, como al ordenamiento de la normativa existente y la conformación de un cuerpo jurídico que precise y determine los derechos y obligaciones de los actores mencionados.

El punto de partida obligatorio de este debate es el principio de que el titular de los servicios públicos es el Estado y no las empresas que lo prestan. Como la inmensa mayoría de los servicios se prestan en condiciones monopolísticas o casi monopolísticas —de competencia imperfecta—, la intervención reguladora del Estado es imprescindible para asegurar que ellos se provean en forma eficiente, a precio justo y con plena satisfacción de una demanda siempre creciente.

El artículo 42 de la Constitución Nacional enumera que "los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e interés económico, a una información adecuada y veraz, a la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno".

Sin embargo, aún falta mucho camino para alcanzar esa meta. Al no haberse dictado —y sancionado por ley del Congreso— los marcos regulatorios previamente a las privatizaciones, la regulación se extravía en una verdadera maraña de resoluciones, decretos y otras decisiones del Poder Ejecutivo, hasta el punto que se ha dicho que constituyen un nuevo Código Civil fragmentario y disperso. A la vez, las marchas y contramarchas sobre tarifas, condiciones de prestación e inversiones, impiden al ciudadano común la comprensión de sus derechos y de las obligaciones de los prestadores.

Tampoco la gestión de los entes reguladores, creados a partir de 1991 para determinados servicios, contribuyeron a definir en la práctica tales derechos y obligaciones. En realidad, se carece de una doctrina de regulación que permita precisar dos áreas de funciones: por un lado, los organismos encargados del control técnico, como los entes reguladores, por el otro, lo que hace a la defensa del consumidor como responsabilidad política específica, en la cual el Congreso de la Nación tiene una particular implicancia.

Es en esta segunda área donde cobra una importancia decisiva la participación de las asociaciones de consumidores —que hasta hoy es precaria e insuficiente— ya que es esencial para la acción reguladora sobre los servicios públicos incorporar la demanda de sus destinatarios y que éstos, a su vez, encuentren un ámbito de defensa de sus intereses.

La Argentina posprivatizadora

Pasados diez años del comienzo del proceso privatizador argentino, parece razonable que todos los actores sociales reflexionemos sobre los cambios inexorables vividos en este período. En esa óptica, resulta vital traer a la memoria los acontecimientos que modificaron las reglas de juego y motivaron un cambio radical en nuestra estructura social y económica.

Esa mutación, que abarcó todos los aspectos que hacen al funcionamiento de los diversos sectores de la economía, se dio en tres direcciones. La primera se trató de las privatizaciones de las empresas de servicios públicos, con el traspaso de activos y de gestión del sector público al privado. Es decir, de aquel Estado empresario monopolístico y prestador de servicios se pasa a un modelo en que la gestión recae en la iniciativa privada mientras que el Estado cumple el papel de árbitro, regulador y controlador de todo ese proceso.

La segunda, abarcativa también de los servicios públicos, implicó la desregulación de la economía en su conjunto o, en otras palabras, un nuevo modelo económico que pregona una economía social de mercado en detrimento de aquel Estado intervencionista y planificador.

Por último, ha habido un replanteo en la relación de la Argentina con el mundo y viceversa. En ese sentido, y en un contexto mundial de agrupamientos regionales, es que se produce la apertura externa de la economía. Este nuevo panorama viene así a plantear una inserción diferente del país tanto a nivel mundial como regional. En forma contigua a esta apertura externa, que es una de las tantas manifestaciones del fenómeno de la globalización, se consolidó la integración de un bloque regional con las naciones limítrofes en la búsqueda de un mercado abierto común.

En líneas generales, estos cambios requieren hoy de un Estado distinto, más dinámico, con mayor eficiencia y, sobre todo, ante la escasez de recursos, dotado de una capacidad imaginativa superior a la de años atrás.

La presente exposición se centrará en dos tópicos: el nuevo modelo de Estado surgido a partir de las reformas, las relaciones existentes entre mercado y Estado y, por último, ahondaré en algunas lecciones de política regulatoria que nos deja la privatización de los servicios públicos en la Argentina.

Diferencias entre el modelo capitalista "extremo" y el Estado de bienestar

El Estado que se conocía hasta fines de la década del 80 estaba presente en todos lados: era absoluto en el sentido de que era poco probable que existiera momento alguno en que no se hiciera presente. Recuerdo los dichos del historiador inglés J. Taylor, de quien voy a tomar sus observaciones para asimilarlas a lo que ocurrió en la Argentina. Taylor observaba que, para un ciudadano inglés de la década del 40, el Estado era algo que rara vez irrumpía en su vida, salvo por su cruce con la policía o por el servicio de milicia obligatorio. Sin embargo, a fines de la década del 70 estaba en todos lados, desde la máquina de afeitar producida por una empresa estatal hasta el transporte que lo llevaba a su trabajo, y el servicio telefónico que utilizaba para comunicarse con sus pares era también fabricado y prestado por una empresa pública.

Nuestra realidad era bastante similar. Es decir, la intervención estatal en los procesos sociales se daba a través de la regulación y de la actuación industrial y comercial. Pero esa gran expansión, ese cúmulo de tareas, de misiones, de empresas, de funciones que reposaban en el Estado, comenzó a cular en crisis en todo el mundo por varios motivos. Podríamos mencionar innumerables causas, lo cierto es que ya fuera porque el déficit era cada vez mayor, por el endeudamiento interno y externo o por la ineficiencia de los servicios que se prestaban, etcétera, todo ello concluyó en la crisis de lo público y en la necesidad de un cambio de las relaciones económicas y del rol del Estado.

Claro que en realidad tal crisis replanteaba el papel del Estado en relación con la sociedad, yo diría que se trataba de adaptar el país al nuevo orden mundial y a lo que la población demandaba. Sin embargo, creo que debiéramos coincidir en que de ese Estado social —incompleto y defectuoso en el caso argentino— era preciso pasar a una sociedad de bienestar, o al bienestar de la sociedad. Y es aquí donde luego dejaré expresada mi crítica, que es constructiva, por supuesto, y que es el problema que hoy la Alianza está encarando con firmeza para eliminarlo.

Es así como el Congreso Nacional sanciona en 1989 la llamada Ley de Reforma del Estado que delegaba en el Poder Ejecutivo la facultad de llevar adelante las privatizaciones de las empresas públicas y a realizar el traspaso de la gestión de los servicios públicos a manos privadas (vía concesión, licencia o permiso). En forma paralela se desregulaba la economía en todos los sectores, salvo aquellos que por su naturaleza o por imperio de la ley no podían prestarse en régimen de competencia. Este no es un dato menor porque varios servicios públicos pasaron a manos privadas pero continuaron siendo monopolios, en algunos casos legales (por ejemplo, telefonía básica) y en otros naturales (por ejemplo, servicio de agua y cloacas).

Los cambios en el modelo de gestión de los servicios y en la nueva estructura de la economía demandaba un Estado a la altura de las circunstancias. Pero para modificar su acción y adecuarse a esos nuevos tiempos había que entender cuál era su nuevo lugar. Por supuesto en todo este proceso de crisis y cambio no faltaron los fundamentalistas de mercado que pregonaban "volvamos al Estado liberal, abstencionista, cerremos cosas, eliminemos servicios, dejemos que la sociedad vaya por sí misma, desregulemos, privaticeemos y volvamos al Estado mínimo".

Lamentablemente, todo esto iba en desmedro de la reconstrucción del nuevo modelo de Estado que de a poco se fue perfilando. Aquí es donde pienso que fracasamos en todo este tiempo y donde me parece que hay que poner los mayores esfuerzos en el futuro. Es preciso que nosotros y la sociedad en su conjunto tomemos conciencia de que el Estado no puede ser sustituido ni eliminado como plantean algunos ortodoxos, sino que por el contrario debe ser reformado de manera tal que cumpla su función de servicio al ciudadano.

No debe olvidarse que hay dos principios esenciales, aparentemente contradictorios, en los que se asienta toda sociedad. El primero de ellos es el principio de la libertad individual y de subsidiariedad estatal; el segundo, no menos importante, es el principio de igualdad de todos los hombres y de solidaridad social. Y es ahí donde está el desafío del Estado contemporáneo, en lograr articular ambos principios, ya que ésa será la clave del nuevo orden económico y social. En tal sentido es bueno recordar que las libertades no pueden ser meramente formales, que la libertad es la liberación del hombre de aquellas necesidades más primarias como el hambre, la enfermedad, etcétera, porque a quienes las padecen les impide de raíz una decisión verdaderamente humana.

Es en este punto donde quiero resaltar que no hay contradicción entre una economía de mercado y el Estado social que pregonamos, por el contrario, este último deberá instrumentar los medios para que las necesidades primarias que mencioné no sólo sean teóricas sino reales, de lo contrario, estaremos lejos de concretar la utopía de una sociedad libre, porque para conseguir la tan ansiada libertad debe haber la menor cantidad posible de desigualdades determinadas por el nacimiento.

Ahora bien, aclarado ya que el Estado sigue teniendo un rol preponderante en el desarrollo de los pueblos, ¿cuáles serían esas nuevas funciones o misiones del Estado?

Enumeraré algunas sin pretender con esto agotar el cúmulo de funciones, que de seguro son varias más de las que he considerado mencionar:

1.- El Estado debe garantizar la seguridad y el pleno ejercicio del derecho de propiedad, o sea, asegurar que cada uno pueda disfrutar de los beneficios de su trabajo.

2. - El Estado debe fijar reglas claras de juego para el desarrollo del mercado, ya que es árbitro y regulador.

3. - El Estado debe corregir el mercado cuando éste se deforma, o no es veraz, porque hay abuso de una posición dominante, porque existe una posición de monopolio, o porque literalmente no hay mercado o éste no puede proporcionar determinados bienes culturales, éticos o sociales.

4. - El Estado debe hacerse cargo de las prestaciones de los servicios sociales, como por ejemplo las prestaciones por desempleo, las sanitarias, a los ancianos, educativas, asistenciales. De la calidad de éstas dependerá en gran medida el nivel de vida de los sectores de la población más desprotegidos.

5. - El Estado debe proveer seguridad, asegurar salud y educación, esto último con el fin de mantener la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos. El sistema de salud y educativo será paralelo al del sector privado.

6. - La actitud protectora del Estado debe dirigirse hacia la persona indigente, cuya situación económica le impide satisfacer sus necesidades básicas.

Vuelvo a reiterar que la enumeración no intenta ser taxativa, es sólo un acercamiento a lo que considero deberían ser algunas de las funciones del sector público.

Como conclusión del punto soslayo la idea de que la construcción de un nuevo modelo de Estado, ágil, eficiente, fiscalizador y regulador allí donde se necesita de su presencia, será uno de los vertices imprescindibles para montar una realidad diferente en la Argentina.

Relaciones entre mercado y Estado

Marcos regulatorios y regulación económica

Como se advirtió en el tópico anterior la transformación de la economía tiene por eje el mercado. Sin embargo, su adecuado funcionamiento no puede tomarse como un dato más y, para ello, la acción complementaria que se despliega desde el Estado es más importante de lo que a priori puede pensarse. Para comenzar a hablar de la confluencia entre mercado y Estado parece conveniente tener presente que en países en vías de desarrollo la intervención o regulación es mayor aún, lo cual tiene desde mi óptica dos causales: una económica y otra social. La primera se daría porque los mercados y economías en desarrollo son incipientes e inmaduros, la segunda estaría vinculada a que las demandas insatisfechas básicas y los problemas de acceso a los servicios elementales son mayores que en naciones con un desarrollo sostenido.

Dejando de lado cuáles serían las causas, hay varios temas que a esta altura de los acontecimientos y con una experiencia de diez años en la materia debiéramos concluir.

En primer lugar, es rotundo el fracaso de aquella hipótesis ortodoxa que sostenía que cuanto más

desregulados sean los mercados mejor será el resultado desde el punto de vista de la eficiencia y del bienestar. Tal paradigma no es más que ideología sin fundamentos científicos y empíricos.

En segundo lugar, la experiencia nacional demuestra que debe existir una necesaria complementación entre mercado y Estado; yendo más lejos aún, diría que esa relación tiene por norte tres aspectos: las regulaciones pro competitivas, las regulaciones correctivas y diversas políticas públicas a nivel macroeconómico, financiero, laboral, social, etc. Es decir, el instrumento regulatorio siempre está al alcance del Estado para que éste se manifieste en las áreas que crea conveniente y, en ese sentido, se puede pasar desde la salud hasta la educación, desde el trabajo hasta el mercado de capitales, llegando finalmente al tema que hoy nos convoca: los servicios públicos.

Los servicios públicos privatizados no fueron exceptuados de la regulación; muy por el contrario, han sido controlados y regulados.

Por supuesto que en la búsqueda de un fundamento a la regulación de los servicios se ha dicho que, en aquellos sectores donde existe monopolio, sea éste natural o legal, la normativa dictada por el Estado vendría a suplir a la competencia inexistente, resguardando los intereses de los más débiles (consumidores) y evitando que se produzcan abusos de posiciones dominantes. Lo cierto es que, aun en un mercado de servicios públicos totalmente competitivo, el Estado siempre puede utilizar su poder de policía para imponer condiciones mínimas de prestación. Todo en tanto y en cuanto se respeten los principios de igualdad y legalidad y tales reglas no sean distorsivas ni impongan gravámenes discriminatorios e inútiles.

Como ejemplo testigo de esto podemos citar los reglamentos de servicios de telecomunicaciones o el marco regulatorio de la actividad postal. Allí se demuestra con claridad que a pesar de prestarse el servicio en régimen de competencia (el de telecomunicaciones a partir de noviembre) la normativa precisa emanada del sector público fija las reglas de juego para el sector. La función regulatoria en la Argentina, en principio, quedó a cargo de los entes reguladores de cada sector. Ese fue el modelo adoptado por nuestro país, es decir, un ente por actividad.

Es preciso que haga algunas aclaraciones en cuanto a cómo funcionó en la práctica el sistema. El diseño institucional de cada ente fue instrumentado en casi todos los sectores vía decreto del Poder Ejecutivo nacional (salvo el sector eléctrico y el de gas). Como consecuencia del modelo adoptado no hubo una armonización legislativa mínima que pudiese aunar criterios en cuanto a cuáles debieran de ser las facultades específicas de los entes reguladores. Por tal motivo, cuando se quiere analizar de qué manera funcionaron y funcionan los reguladores en nuestro país, hay que conocer qué facultades tiene ese organismo; si es sólo de control, si

es regulador y fiscalizador, o si es como se lo ha denominado una pequeña "republiqueta" con funciones reguladora, fiscalizadora y jurisdiccional.

Es decir que se torna difícil analizar cómo funcionó el regulador en un sentido global, sólo puede medirse su efectividad por separado como si cada sector fuese un compartimento estanco. Además, hay un factor que no puede dejar de tenerse en cuenta, es el de que muchos entes reguladores con funciones originales en la regulación y el control de la actividad fueron amputados de su función reglamentaria y se convirtieron en virtuales entes de control o fiscalización (ejemplo: C.N.C., C.N.R.T.). La potestad regulatoria fue cedida en la mayoría de estos casos a los secretarios de Estado del área respectiva.

En este punto, me parece oportuno compartir con ustedes una propuesta que he venido meditando desde hace tiempo y que en rigor de verdad tiene vigencia en varios países del mundo. Siempre he pensado que una cosa es la regulación, o sea fijar la política o las reglas de juego del sector y otra muy distinta es el control o fiscalización de la actividad. En tal sentido, hay un problema de diseño de nuestros entes y de asignación de funciones. Digo esto porque la fiscalización debería rendir culto al principio de inmediatez, que dice que para un efectivo control siempre es mejor estar cerca del problema. Siguiendo la línea de pensamiento expuesta creo que la fiscalización de los servicios públicos debería recaer en las provincias y sólo la regulación quedar en manos de la Nación.

Para concluir con el tema me parece oportuno reflexionar sobre cuál es el fin de la regulación. Parece lógico que tal finalidad no puede ser otra que la que tiene toda actividad estatal; por lo que el objeto de los entes reguladores y de las normas que de ellos emanan es proteger los intereses de la comunidad o, en otras palabras, la tutela del bien común. El logro de ese objetivo dependerá de que el conjunto de principios, reglas y normas (regulación) sean el marco adecuado para:

1. - Generar competencia allí donde sea posible.
2. - Lograr que los sectores de más bajos recursos económicos puedan tener acceso a los servicios básicos.

Lecciones de la privatización de servicios públicos en la Argentina.

El presente punto tiene por aspiración reflexionar sobre algunas ideas que se han ido modificando con el mismo andamiaje de las instituciones.

Como punto de partida inexorable es preciso notar que hay una transformación importante en el rol que le cabe a los usuarios de los servicios públicos. Antiguamente, cuando el prestador monopólico era el Estado, los ciudadanos tenían una participación escasa o casi nula en el proceso de prestación del servicio; no porque el derecho no los amparara

sino por la manera en que se brindaban las prestaciones. Quiero recordar que el Estado era prestador, regulador y fiscalizador lo cual no es un dato menor. Se tornaba muy difícil para el usuario realizar un reclamo ya que debía hacerlo ante quien era juez y parte a la vez. Además, el órgano que controlaba el funcionamiento del servicio se encontraba por lo general dentro de la propia empresa que lo brindaba.

Hoy los usuarios se encuentran en una posición distinta; la propia Constitución reformada de 1994 les concede una serie de derechos importantes como la posibilidad de formar asociaciones entre ellos, la legitimación para actuar colectivamente ante la justicia y principalmente la facultad de integrar los entes reguladores del sector de que se trate. En este último punto se discute si deben formar parte del directorio o no, pero lo cierto es que a pesar de esa cuestión hoy los usuarios son y pueden ser escuchados por quienes tienen la responsabilidad de tomar las decisiones.

Otra enseñanza que nos han dejado estos diez años -y en esto hablo con una mayor experiencia por ser miembro de la Comisión Bicameral de Reforma del Estado y Seguimiento de las Privatizaciones del Congreso- es que los contratos del derecho administrativo no son inmutables como los del derecho civil. Esto es lo que los españoles llaman el principio de mutación o de adecuación contractual. El tiempo nos ha demostrado que, a veces por motivos técnicos, como puede ser un avance tecnológico, o por desequilibrios en la ecuación económico-financiera del contrato, o porque nuevos requerimientos de carácter público lo demandan (por ejemplo un caudal de tránsito mayor al esperado en una ruta), los contratos deben adecuarse y la autoridad debe haberlo de común acuerdo con la contratista o concesionaria.

Esto me parece que debería ser un tema que hay que tener claro, en los contratos administrativos siempre está en juego el interés general o público y eso es lo que lo diferencia de los de derecho privado. Por supuesto que esa adecuación tiene algunos límites y no es facultad discrecional del regulador.

En tal sentido es importante el respeto del principio de igualdad y que las circunstancias que han cambiado o mutado sean objetivas. Aquí es donde me parece que tienen un rol importante los usuarios, porque ellos son oídos y deben hacerse escuchar cuando se intenta cambiar algunas condiciones, máxime si tenemos en cuenta que en la mayoría de los casos son cautivos del servicio. En esa dirección se incorporó otro instituto vital para la democratización de los servicios públicos que es la audiencia pública. Es ahí donde se expresa la ciudadanía en general y también todos los actores del sector que tengan algún interés.

Para finalizar con estas lecciones que dejaron diez años de trabajo quiero manifestar que es cierto que aún falta aceitar un poco más estos procedimientos y métodos que mencioné, aunque no es poca cosa lo que se ha logrado. Ese es el desafío hacia el futuro.

Conclusiones

Para finalizar, es preciso enmarcar el debate sobre control y regulación en otro más amplio, relativo al conjunto programático que abarca desde la reformulación de las políticas sociales, la definición de estrategias de crecimiento y desarrollo y nuevos canales de inserción en el mercado mundial.

Precisamente, la aplicación sistemática del modelo neoconservador ha acarreado —al menos en la primera fase de su aplicación— fragmentación social y ha inducido la insolidaridad, el desereamiento en las instituciones y el desinterés por la participación política.

No obstante, los cambios políticos a nivel mundial y nacional han contribuido no sólo a abrir el debate sobre el modelo supuestamente “único” sino a restaurar las expectativas en torno a un nuevo tipo de Estado superador tanto del fundamentalismo neoliberal, que todo lo remite a la acción de los mercados, como del viejo Estado ineficiente y elefantiásico.

En ese marco, resulta interesante echar un vistazo al debate abierto en varios países europeos sobre la posibilidad y la necesidad de reformular programas y estrategias acordes con los cambios a nivel mundial a la vez que preservar e incluso revalorizar los principios fundacionales de la socialdemocracia. Después de todo, equidad y justicia social, libertad e igualdad de oportunidades, solidaridad y responsabilidad hacia los demás son valores comunes que hacen a la tradición socialdemócrata europea de todas las épocas.

Promover el empleo y la prosperidad, ofrecer a todos los individuos la oportunidad de desarrollar totalmente sus potenciales únicos, combatir la exclusión social y la pobreza, reconciliar el progreso material con un desarrollo sostenible del medio ambiente y con la responsabilidad hacia las generaciones futuras, enfrentar a los problemas comunes que amenazan la cohesión de la sociedad, como la delincuencia y las drogas, son objetivos que están en las plataformas de los socialistas de toda Europa, pese a las diferencias entre la llamada “tercera vía”, a la que adhieren alemanes e ingleses, y los postulados de franceses e italianos. Y aunque todos coinciden en que “la función esencial de los mercados debe ser complementada y mejorada por la acción política, no entorpecida por ésta”, prevalece la consigna compartida de que “apoyamos una economía de mercado, no una sociedad de mercado”.

El hombre no es sólo individuo, sino también persona, es decir que está inserto en una comunidad y es parte de ella. De ahí nuestro hincapié en los derechos ciudadanos, cuya vigencia no puede ser dejada al arbitrio del sector privado.

Hace ya más de un siglo, con la Revolución Industrial que nació en Inglaterra, el capitalismo moderno, en plena expansión tecnológica y productiva, demandó que las condiciones de reproducción de la fuerza de trabajo —esto es la salud y la educación—, hasta entonces a cargo de la familia, se trans-

formaran en una obligación del Estado. Nacieron así los primeros derechos sociales, a los que se agregarían la seguridad social y la regulación de las condiciones de trabajo.

Pero la ortodoxia fundamentalista propone en los hechos una regresión al transferir los derechos sociales al ámbito privado, paralelo al desentendimiento del Estado de tales derechos.

El sociólogo italiano Rocco Butiglione señala que el mercado no registra los deseos de quienes no tienen dinero, es decir poder de compra. De ahí que este autor señale dos funciones reguladoras que el Estado debe ejercer: la primera, registrar los deseos y necesidades de los que no tienen poder de compra y hacer que el mercado pueda satisfacerlas. La segunda, consiste en que el Estado debe aplicar políticas para lograr que quienes no tienen dinero puedan tenerlo a través del acceso a un empleo y a un salario, asegurando su participación en la generación de la riqueza social.

Por eso la función central de la política es la de edificar y dar sentido al futuro, y es indispensable para dotar al Estado de la capacidad, la autoridad y la eficacia necesarias para poner equilibrio, orientar y estimular la producción, el empleo, la educación y la salud.

La Argentina tiene, en el futuro inmediato, la posibilidad y la necesidad de aplicar un proyecto superador. Si la globalización ha cambiado de cuajo las reglas del mercado mundial, ha producido al mismo tiempo una formidable expansión de los flujos económicos, sociales y culturales que es preciso aprovechar.

El país y la región del Mercosur, en primer lugar guardan enormes posibilidades productivas, cuya suerte depende del coraje, la sensibilidad y la inteligencia con que todos encaremos esta nueva etapa.

Por todos estos antecedentes y conceptos voto afirmativamente por este artículo.

3

INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO TOMA

Opinión del señor diputado acerca del artículo 58 del proyecto de ley de presupuesto de la administración nacional para el ejercicio 2001.

El artículo 58 constituye un significativo aporte a la tarea de la reestructuración de las fuerzas armadas, consagrada por la ley que oportunamente aprobó este Congreso, dado que la implementación de la misma venía sufriendo un retraso en aquellos aspectos vinculados a la modernización del equipamiento de las mismas debido a las restricciones presupuestarias por todos conocido.

El texto en tratamiento pretende salvar ese problema perfeccionando un mecanismo que toma como base lo establecido en la ley 23.985 de disposición de los bienes privados del Estado en uso por

las fuerzas armadas, dejando claramente establecido que la totalidad del producido por la venta de bienes inmuebles, se aplicará a tal finalidad, es decir tanto a la recomposición del ciclo logístico como a la modernización e incorporación del material necesario al cumplimiento eficaz de la misión que las mismas tienen encomendada.

El aspecto novedoso de este artículo es que incorpora lo que se ha denominado como Plan Director de las fuerzas armadas. Este plan, cuya copia se acompaña en forma aneja, es un paso de gran significación pues no sólo prevé un conjunto de requerimientos a los cuales aplicar dichos fondos y, por ende, genera una perspectiva de largo plazo en la planificación de lo pautado en la Ley de Reestructuración de las fuerzas armadas, sino que además incorpora un mecanismo de elaboración del mismo basado en una tarea conjunta entre todas las fuerzas.

En efecto, el requerimiento contenido en el plan, no sólo es preciso y detallado, sino que fue elaborado en virtud de sus propias necesidades por cada fuerza y elevado a la consideración del Estado Mayor Conjunto, el cual redactó el texto final con el consenso de cada uno de los estados mayores. Este no es un dato menor pues al mismo tiempo que permite una planificación en este aspecto, pone en práctico uno de los mayores desafíos que se enfrenta

hoy en el plano de la organización militar: lograr la indispensable conjunción en el accionar de las fuerzas que garantice una utilización racional de los recursos y grados crecientes de compatibilidad e interoperatividad.

El hecho de que una iniciativa de esta naturaleza haya logrado un amplio consenso por parte de todos los partidos políticos y haya sido un tema que junto con el Plan Nacional de Radarización, entre otros, se analizara y debatiera en el ámbito de la Comisión de Defensa Nacional de esta Cámara a lo largo de este año, constituye a todas luces, un motivo de legítimo orgullo, pues ratifica en los hechos algo ya consagrado hace muchos años: los temas de Defensa y todos aquellos aspectos vinculados a la cuestión militar, se abordan como temas de Estado y por ende con clara conciencia estratégica, que los sustrae de los avatares circunstanciales de la coyuntura política o de su manipulación en contextos electorales.

Por todo lo expresado quiero expresar una vez más mi satisfacción como presidente de la Comisión de Defensa Nacional que en un tema como el que consagramos en el presente artículo se haya verificado una tarea compartida por la inmensa mayoría de las fuerzas políticas y un intercambio y una colaboración permanente con las fuerzas armadas y el Ministerio de Defensa. Muchas gracias.

1. RECUPERACIÓN DEL CICLO LOGÍSTICO – Adquisición de repuestos y material para poner en servicio unidades o sistemas aptos para recuperar capacidades operativas –

PR	PROGRAMA	CANT. UNIDADES AFECTADAS	COSTO
A. RECUPERACIÓN DEL CICLO LOGÍSTICO (ADQUISICIÓN DE REPUESTOS)			
	EJERCITO ARGENTINO		
1	REPOTENCIACIÓN DE TRANSPORTADORES DE 25 TON P/APOYO MOVILIDAD ESTRATÉGICA DE MATERIAL	83	\$ 1.286.500
2	REPOTENCIACIÓN DE TRANSPORTADORES DE 40 TON P/APOYO MOVILIDAD ESTRATÉGICA DE MATERIAL	17	\$ 399.500
3	REPOTENCIACIÓN DE VC TANQUE TAM - VEHÍCULO COMBATE OPERACIONAL	35	\$ 3.500.000
4	REPOTENCIACIÓN DE VC FAMILIA TANQUES TAM - VEHÍCULO COMBATE OPERACIONAL	42	\$ 3.360.000
5	REPOTENCIACIÓN DE VC FAMILIA TANQUES TAM - VEHÍCULO COMBATE OPERACIONAL	40	\$ 5.400.000
6	REPOTENCIACIÓN VC TANQUE SK 105 - VEHÍCULO COMBATE OPERACIONAL	81	\$ 4.050.000
7	REPOTENCIACIÓN VEHÍCULO EXPLORACIÓN PANHARD - VEHÍCULO COMBATE OPERACIONAL	8	\$ 720.000
	SUBTOTAL		\$ 18.716.000
	ARMADA ARGENTINA		
8	SUPERVIVENCIA CHALECOS SALVAVIDAS	1.600	\$ 371.857

PR	PROGRAMA	CANT. UNIDADES AFECTADAS	COSTO
9	SUPERVIVENCIA BALSAS SALVAVIDAS	200	\$ 928.000
10	EQUIPO INDIVIDUAL SUPERVIVENCIA PILOTOS		\$ 100.000
11	AVISOS	1	\$ 3.500.000
12	ADQUISICIÓN HELICÓPTEROS FENEC AS 555 CON RADAR Y REPUESTOS	2	\$ 15.000.000
13	ADQUISICIÓN MUNICIÓN Y PIROTECNIA		\$ 6.000.000
14	SISTEMA TCASS		\$ 460.000
15	ADQUISICIÓN EQUIPO APBT		\$ 1.030.000
16	ADQUISICIÓN EQUIPO APCA		\$ 420.000
17	ADQUISICIÓN REPUESTOS TURBINAS MEKO 360 H2		\$ 6.400.000
18	ADQUISICIÓN REPUESTOS SISTEMA DE PROPULSIÓN Y GENERACIÓN ELÉCTRICA		\$ 3.000.000
19	ADQUISICIÓN REPUESTOS H3		\$ 5.000.000

PR	PROGRAMA	CANT. UNIDADES AFECTADAS	COSTO
20	BATERIAS SUBMARINO SALTA		\$ 3.500.000
21	VEHICULOS (AMBULANCIAS, AUTOBOMBAS, FIC UP, CAMIONES, ETC.)		\$ 1.000.000
22	ADQUISICIÓN VEHICULOS P/MOVIMIENTO MUNICIÓN		\$ 163.000
23	GRUA LORAINE		\$ 400.000
24	GMDSS (SOCORRO MARÍTIMO)		\$ 467.720
25	ADQUISICIÓN REPUESTOS SISTEMA LANZAMIENTO DE EJERCICIO SST4		\$ 60.000
26	RECUPERACIÓN CAPACIDAD SISTEMA DE SALVAMENTO Y BUCEO		\$ 80.000
27	COMPUERTA DIQUES		\$ 1.900.000
	SUBTOTAL		\$ 49.780.577
	FUERZA AEREA ARGENTINA		
28	A4-AR - AVIÓN DE DEFENSA AEROSPAIAL -	36	\$ 53.000.000
29	IA-63 PAMPA - AVIÓN DE INSTRUCCIÓN	12	\$ 9.050.000

PR	PROGRAMA	CANT. UNIDADES AFECTADAS	COSTO
30	MIRAGE III EA - AVIÓN DE DEFENSA AEROESPACIAL	12	\$ 6.000.000
31	MIRAGE 5 F - AVIÓN DE DEFENSA AEROESPACIAL	17	\$ 2.700.000
32	IA-58 PUCARA - AVIÓN DE INSTRUCCIÓN DE COMBATE -	24	\$ 5.280.000
33	TUCANO 312 - AVIÓN DE INSTRUCCIÓN	27	\$ 3.330.000
34	RADAR TPS 43 - GUIADO AERONAVES INTERCEPTORAS DE VUELOS ILEGALES	4	\$ 513.000
35	KC-130 - AVIÓN REABASTECEDOR	2	\$ 739.000
36	BELL UH 1H - HELICÓPTERO PARA BÚSQIEDA Y SALVAMENTO -	8	\$ 1.300.000
37	HUGHES 500 - HELICÓPTERO LUCHA FUEGO FORESTAL -	8	\$ 900.000
	SUBTOTAL		\$ 82.812.000
	TOTALES GENERALES		\$ 151.308.577

2. ADQUISICIÓN DE MATERIAL - Para recomposición del ciclo logístico, modernización y completar dotación

PR	PROGRAMA	CANT. UNIDADES AFECTADAS	COSTO
C. ADQUISICION DE MATERIAL			
	EJERCITO ARGENTINO		
1	AMBULANCIAS PARA APOYO A LA COMUNIDAD Y EN EL MARCO REGIONAL Y DE LA UN	58	\$ 2.900.000
2	MICRO 40 PASAJEROS PARA APOYO A LA COMUNIDAD Y EN EL MARCO REGIONAL Y DE LA UN	85	\$ 5.100.000
3	TRANSPORTADORES 60 TON PARA VEHICULOS DE GRAN PORTE Y BLINDADOS	30	\$ 9.000.000
4	EQUIPAMIENTO DE VISIÓN NOCTURNA A LOS VEHICULOS DE COMBATE DE BRIGADA	3	\$ 25.981.000
5	EQUIPAMIENTO DE VISIÓN NOCTURNA A LOS VEHICULOS DE COMBATE DE UN ELEMENTO DE ASALTO AÉREO	1	\$ 420.430
6	LANZADOR MISILES ANTITANQUES TIPO TOW-A2 P/DEFENSA Y CUMPLIMIENTO COMPROMISOS CON MISIONES ONU Y OTAN SOBRE EQUIPAMIENTO DE SISTEMAS DE ARMAS	13	\$ 2.600.000
7	MISILES ANTITANQUES TIPO TOW-A2 P/DEFENSA Y CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS CON MISIONES ONU Y OTAN SOBRE EQUIPAMIENTO DE SISTEMAS DE ARMAS	61	\$ 1.830.000
8	SISTEMA INTEGRADO PARA DIRECCIÓN DEL TIRO ARTILLERÍA CAMPAÑA (TRUENO) PARA FACTOR DE FUERZA APOYO DE FUEGO E INTEGRACIÓN A UN SISTEMA DE DEFENSA REGIONAL. DE FABRICACIÓN NACIONAL.	3	\$ 8.776.020

PR	PROGRAMA	CANT. UNIDADES AFECTADAS	COSTO
9	REPARACIÓN PUENTE KRUPP PARA RECUPERACIÓN DE MEDIOS DE INGENIEROS PARA APOYO A LA LOGÍSTICA Y A LA COMUNIDAD	1	\$ 540.000
10	SISTEMA ÚNICO DE COMUNICACIONES DE CAMPAÑA PARA BRINDAR APOYO DE COMUNICACIONES EN CAMPAÑAS A LAS GRANDES UNIDADES DE COMBATE	1	\$ 8.528.325
11	SISTEMA ÚNICO DE COMUNICACIONES DE CAMPAÑA (SUCOM) - RED TELEFÓNICA ALÁMBRICA -CORRESPONDIENTE AL EQUIPAMIENTO TELEFÓNICO NECESARIO PARA LA INSTALACIÓN DE LOS NODOS DE COMUNICACIONES DEL SISTEMA TELEFÓNICO PARTICULAR DEL EJÉRCITO (SISTELPAR) A NIVEL GRAN UNIDAD DE COMBATE	6	\$ 612.000
12	SISTEMA ÚNICO INFORMÁTICO PARA APOYO DE COMUNICACIONES		\$ 700.000
13	SISTEMA SATELITAL COMUNICACIONES -PERMITE ENLACE DEL EMGE, LOS COMANDOS DE CUERPO Y LOS DE GRAN UNIDAD DE COMBATE		\$ 1.494.000
14	AMPLIACIÓN SISTEMA DE GUERRA ELECTRÓNICA		\$ 4.500.000
	SUBTOTAL		\$ 72.981.775
	ARMADA ARGENTINA		
15	SISTEMAS ANTICONTAMINACIÓN		\$ 150.000
16	EQUIPOS CONTROL AVERÍAS COFM		\$ 345.000

PR	PROGRAMA	CANT. UNIDADES AFECTADAS	COSTO
17	EQUIPAMIENTO ARMAS DE GUERRA, ELECTRONICA Y COMUNICACIONES P/DESTRUCTORES Y CORBETAS		\$ 3.000.000
18	ADQUISICIÓN DE ARMAMENTO PARA LA INFANTERÍA DE MARINA		\$ 800.000
19	MODERNIZACIÓN MEDIOS CONTROL RECURSOS MARÍTIMOS Y SAR		\$ 1.480.000
20	ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTO ILS BAPI		\$ 50.000
21	PLANTA DESMILITARIZACIÓN MUNICIÓN		\$ 416.000
22	LANCHAS CLASE POINT		\$ 600.000
23	ADQUISICIÓN DEFENSA MUELLES		\$ 200.000
24	ADQUISICIÓN BATERÍAS SUBMARINO SAN JUAN		\$ 5.200.000
25	EQUIPAMIENTO COCINA CUARTEL BASE		\$ 170.000
26	EQUIPAMIENTO SANIDAD EN COMBATE BUQUES Y ENFERMERÍAS		\$ 230.000
27	PROYECTO ELENA		\$ 205.000

PR	PROGRAMA	CANT. UNIDADES AFECTADAS	COSTO
28	ADQUISICIÓN PLAQUETAS CRIPTOGRÁFICAS		\$ 250.000
29	PLANTAS PROPULSORAS FRAGATA LIBERTAD		\$ 2.000.000
30	ADQUISICIÓN RADARES ANTISUP/AA		\$ 573.000
31	EQUIPAMIENTO BATALLÓN DE APOYO LOGÍSTICO, DE USO DUAL (COMBATE Y APOYO A LA COMUNIDAD)		\$ 1.821.000
32	ASCENSORES		\$ 1.565.000
33	C31-IM (CONTROL Y DIRECCIÓN DE TIRO)		\$ 5.000.000
	SUBTOTAL		\$ 24.055.000
	FUERZA AEREA ARGENTINA		
34	IA-63 PAMPA - ADQUISICIÓN KIT DE TIRO Y BOMBARDEO	12	\$ 2.133.000
35	ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTO COMUNICACIONES PARA ENLACE DE VOZ Y DATOS	36	\$ 5.830.000
	SUBTOTAL		\$ 7.963.000
	TOTALES GENERALES		\$ 104.999.775

DEBITADOS

3. FUTURAS INCORPORACIONES: Necesidad de adquisición de Adiestradores/Simuladores para capacitar a los apuntadores e intensificar su entrenamiento en distintas armas.

PR	PROGRAMA	CANT. UNIDADES AFECTADAS	COSTO
D. FUTURAS INCORPORACIONES			
	EJERCITO ARGENTINO		
1	SIMULADOR DE TIRO PARA OBSERVADOR ADELANTADO (SIMOA) ADIESTRADORES/SIMULADORES DE SALÓN QUE PERMITEN LA INSTRUCCIÓN Y EL ADIESTRAMIENTO DE LOS OBSERVADORES ADELANTADOS DE LOS FUEGOS DE APOYO	27	\$ 1.012.500
2	SIMRA ADIESTRADORES/SIMULADORES QUE PERMITEN INSTRUIR Y ADIESTRAR HASTA 8 HOMBRES SIMULTÁNEAMENTE. SIMULA LOS FUEGOS EN LA ZONA DE BLANCO DESDE MORTEROS PESADOS HASTA EXPLOSIONES DE MUNICIÓN DE ARTILLERÍA CAL 155 MM	8	\$ 803.200
TOTALES GENERALES			\$ 1.815.700

4. PROYECTOS EN EJECUCIÓN: Con asignaciones presupuestarias previstas al Plan Estratégico de Reequipamiento y Restructuración del EA.

PR	PROGRAMA	CANT. UNIDADES AFECTADAS	COSTO
E. PROYECTOS EN EJECUCIÓN			
	EJERCITO ARGENTINO		
1	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE PROYECTOS APLICABLES AL EQUIPAMIENTO PARA LA DEFENSA CONDUCENTES AL INCREMENTO DE LA POTENCIA DEL FUEGO	5	\$ 525.000
2	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE PROYECTOS APLICABLES AL EQUIPAMIENTO PARA LA DEFENSA CONDUCENTES AL INCREMENTO DE LA CAPACIDAD DE ADIESTRAMIENTO	3	\$ 312.454
3	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE PROYECTOS APLICABLES AL EQUIPAMIENTO PARA LA DEFENSA CONDUCENTES AL INCREMENTO DE LA CAPACIDAD INFORMÁTICA	2	\$ 112.800
4	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE PROYECTOS APLICABLES AL EQUIPAMIENTO PARA LA DEFENSA CONDUCENTES AL INCREMENTO DE LA CAPACIDAD DE COMBATE DE CONTACTO DIRECTO	3	\$ 48.000
5	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE PROYECTOS APLICABLES AL EQUIPAMIENTO PARA LA DEFENSA CONDUCENTES AL INCREMENTO DE LA CAPACIDAD LOGÍSTICA	3	\$ 46.200
6	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE PROYECTOS APLICABLES AL EQUIPAMIENTO PARA LA DEFENSA CONDUCENTES AL INCREMENTO DE EFECTUAR DEMOLICIONES	1	\$ 22.000

7	CONSTRUCCION DE DEPÓSITOS PARA MUNICIÓN NO TRADICIONAL TIPO M2 DE 250 M2 CON MURO DE CONTENCIÓN, PARA MUNICIÓN TIPO M4 CON UNA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE 120 M3 CADA UNO. (INFRAESTRUCTURA PARA LA DEFENSA)	\$	1.154.000
TOTALES GENERALES		\$	2.220.454